

RTVE: deuda y servicio público

Como es habitual con cada cambio legislativo, se ha vuelto a plantear el viejo problema de cómo afrontar la deuda de la televisión pública. En el horizonte, una comisión de sabios a la que se le piden propuestas de solución definitiva; y un globo-sonda de privatización que enardece a los sindicatos. Cabe preguntarse: ¿la echaríamos mucho de menos si no existiera la televisión pública? Lo que se ofrece en la primera cadena de TVE no justifica la financiación pública, ya que sus contenidos poco difieren de la oferta de las privadas: informativos con credibilidad y objetividad bajo mínimos, programas de ínfima calidad por los que se pasea el mismo famoseo de las privadas, o con una oferta pretendidamente cultural que no supera las más mínimas exigencias en este sentido.

Las honrosas excepciones de buenos programas culturales están condenadas a franjas horarias imposibles, y siempre en *la segunda*. Las distintas cadenas de RNE están, en general, más cerca de lo que se espera de la calidad deseable en un servicio público. Poco más que esto

último se echaría en falta; pero, al menos, no tendríamos que pagar con nuestros impuestos una deuda imparable; ni obligar a nuestra paciencia a soportar la agresividad publicitaria del ente; ni nos sentiríamos víctimas de la manipulación informativa, a merced del partido gobernante de turno.

El peso de la deuda acumulada

A fin de este año, la deuda acumulada por Radio Televisión Española rozará los 7.000 millones de euros (más de un billón de las antiguas pesetas), lo que genera unos gastos financieros de 256 millones de euros al año. Si se incorporara la deuda de RTVE a la deuda del Estado, ésta se incrementaría del 52 al 53 %, 1 punto del PIB. ¿A cuánto asciende lo que *debemos*, cada ciudadano, por RTVE?

Cada nueva legislatura se habla de corregir este exceso; pero al final pueden más las razones de contar con unos poderosos instrumentos de propaganda afines, y los *números rojos* siguen creciendo imparables. Rodríguez Zapatero promete acabar con la deuda. Es oportuno recordar que fue precisamente en los seis últimos años del gobierno socialista anterior cuando se multiplicaron por cuatro las pérdidas del ente, y con una plantilla sobredimensionada. Pesada carga que, lejos de solucionarse, se incrementó con gastos financieros desorbitados y con el fracaso de varios intentos de saneamiento en las siguientes legislaturas: de los 1.587 millones de euros de deuda de 1996, se ha llegado a los 6.892 millones actuales. La irrupción de las televisiones privadas en 1990 agudizó defectos y finanzas.

El Plan de Viabilidad del PP, elaborado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con la adscripción de RTVE a este organismo desde 2001, que prevé medidas de rigor presupuestario y un plan de ajuste *blando* para renovar la plantilla y reducir categorías profesionales, llega tarde; y no se sabe si continuará o se suspenderá. Los 9.327 trabajadores amenazan con la huelga si se pretende ir más allá, esto es, si se piensa en la privatización, sea parcial o total, como se

comenta. Son demasiados los intereses creados dentro y fuera de *la casa*, como para que los beneficiados quieran que la situación cambie. Contratos millonarios están detrás de la obstinada negativa a cualquier intento de modificación del *statu quo*, productoras pertenecientes a los mismos contratados y trabajadores del ente que mueven cifras de espanto con cargo a las cuentas de **TVE**, sueldos *estrella* de determinados presentadores y directores que no se corresponden con lo que muestran o hacen, redes internas de corrupción en el pago de servicios y en las contrataciones externas guiadas por el más descarado amiguismo... Para corregir tantas irregularidades, ya añejas, y por lo mismo, consolidadas y arraigadas, con un saneamiento profundo y a la vez muy amplio, sería necesaria una gran dosis de valentía política, que no sabemos si se posee.

¿Quién le pone el cascabel al gato? Y ¿cómo?

Ante la magnitud de la tarea, una medida de la que se esperan soluciones es la *Comisión de Sabios* designada por el nuevo gobierno. Se confía en que el reconocido prestigio de sus miembros proporcione una definición de lo que debe ser una televisión pública, un *servicio público* de calidad. El compromiso gubernamental es llevar sus propuestas al Parlamento: su informe, que, según se anunció primero deberá elaborarse en unos nueve meses, aunque ahora la nueva directora habla de dos años, tendrá carácter vinculante, según promesa electoral; pero hay muchas voces escépticas sobre la posibilidad de que contemplen un plan de saneamiento definitivo. Habrá que esperar, mientras sigue creciendo la deuda un poco más.

Hasta ahora RNE no se financia del todo con publicidad, lo que es de agradecer; pero TVE nos sigue agobiando con muchas horas de anuncios al día. Tampoco en este aspecto la TVE pública se diferencia de las privadas. Su sistema de financiación es mixto: con dinero público, y con publicidad, ésta sin límite alguno, lo que supone competencia desleal con las privadas y lleva a la oferta de programas similares con criterios puramente comerciales. El año pasado TVE facturó el 30,6 %

de la contratación publicitaria total de 2.274 millones de euros. Crece la publicidad con campañas como la de rebajar las tarifas publicitarias en un 10 %, crecen los ingresos publicitarios de TVE (871 millones de euros en la actualidad) y, llamativamente, siguen creciendo los números rojos y la corrupción que la genera.

Las cadenas europeas, salvo la BBC, un modelo en el que todos confiesan querer mirarse, que no emite publicidad, tienen limitado el porcentaje por dicho concepto: las alemanas, un 13 %; las francesas, 34 % y las italianas, un 44 %. No estamos solos en el sistema de financiación mixto, lo que no significa exculpación. Como muchas de las televisiones europeas, TVE recibe de los fondos públicos subvenciones que exceden lo lógico y permitido legalmente. La Asociación Europea de Televisión Comerciales (ACTE) denunció en varias ocasiones la competencia desleal de las cadenas públicas europeas, que reciben de media 15.000 millones de euros anuales para cubrir el 70 % de sus ingresos, con lo que se convierten en la «tercera industria más subvencionada de Europa». En algunos casos, estas ayudas alcanzan el 92 % de los ingresos, como en la televisión sueca, o el 91 % de la danesa, el 84 % de la alemana, el 81 % de la BBC, el 64 % de la francesa y el 52 % de la RAI. Tras las más de diez denuncias presentadas ante la Comisión Europea, Bruselas no ha diseñado aún un marco legal que regule el mercado audiovisual de la zona. Sin embargo, ha advertido a las autoridades españolas que el aval prestado por el Estado al Ente excede los costes netos de la prestación del servicio público.

Uso partidista de los medios públicos y privatización

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa denunció en un informe reciente la presión política que se ejerce en varios medios de Italia, Grecia, Portugal, Inglaterra y, naturalmente, España. Claramente se denuncia el *clientelismo político*, el *paternalismo estatal*, su *partidocracia*. La manipulación de los medios depende en gran medida del carácter de los órganos de decisión. En España los responsables siguen siendo designados por el propio gobierno; en Italia, en Francia y en Alemania,

por ejemplo, por Consejos de Administración con fuerte presencia gubernamental; y el director general de la BBC es nombrado por doce directores (*governors*) escogidos por la Corona entre hombres y mujeres de prestigio en el mundo de las artes, la cultura y la comunicación. Diversos modelos, todos mejorables, en mayor o en menor medida.

Rodríguez Zapatero también ha prometido liberar a TVE de la lacra de la manipulación partidista. Sin embargo, la posible esperanza se disipa cuando, sin contar aún con el informe de los *sabios*, la nueva directora de RTVE adelantó la decisión de suprimir sin más las tertulias de RNE, con la argumentación de que *«la opinión no cabe en un servicio público»*. O cuando se conocen los niveles de escandalosa manipulación que desde hace años se ejerce en comunidades como la andaluza, bajo imperio socialista. ¿Es eso luchar contra el partidismo político?

No hay medio persuasivo más poderoso que el televisivo, por lo que gobiernos, partidos y grandes grupos de comunicación no resisten la tentación de hacer uso de este instrumento para sus propios fines. Un servicio público debería, sobre todas las cosas, garantizar la libertad de expresión y de información contra estas tendencias. Hasta la supuesta imparcialidad de la BBC ha recibido críticas bien merecidas por su información de la guerra de Irak; y continuamente se alzan las voces de quienes señalan que la libertad de expresión se encuentra cada vez más amenazada. La Freedom House informó hace unos meses de que *«la libertad de prensa ha sufrido un sustancial retroceso en todo el mundo»*, a causa de *«la coacción legal, la presión política y la violencia de parte de las entidades estatales y no estatales contra los periodistas»*.

La privatización podría suponer a los gobernantes perder unas cuotas de poder considerable, pero no necesariamente sería la garantía de la libertad de información. Un ejemplo paradigmático es el enorme imperio mediático de Silvio Berlusconi, con su doble influencia, en la televisión pública y en sus medios privados. No creemos que se asuman desde los partidos ni menos aún desde los sindicatos medidas privatizadoras; porque ya hubo varios planes de privatización parcial,

entre ellos el de Mónica Ridruejo y de otros antiguos directores de RTVE, que acabaron ruinosamente para sus mentores. Más aún, cada uno de estos intentos de privatización parcial para acercarse al deseable saneamiento han contribuido a la volatilidad del cargo. Nuevamente, se necesita mucho valor para proponer cambios en esta dirección.

La privatización no parece una solución posible si antes no se garantiza la eficacia y la honradez de gestiones y gestores. Además, ¿quién compraría una empresa que arroja unas pérdidas anuales de más de 600 millones de euros y con la deuda acumulada de siete mil millones? Y, en tal caso, ¿a qué costo?, ¿a cambio de qué concesiones? El riesgo está en el *do ut des* al que tan proclives se manifiestan los políticos en su afán de ganar elecciones y de perpetuarse en el gobierno. La privatización no garantiza la libertad de expresión, máxime cuando el posible comprador —el grupo PRISA— pertenece a la esfera de intereses del gobierno. Si ya de por sí el panorama mediático español es cada día más monocolor por la creciente concentración empresarial de la que siempre parecen beneficiarse los mismos grupos, la misma ideología, ¿no corresponde al servicio público la responsabilidad de ofrecer el ámbito adecuado para que se expresen las voces disidentes?

A modo de conclusión

Hasta ahora, ningún gobierno ha resistido la tentación de utilizar los medios audiovisuales públicos en su propio beneficio político. Y esto es así no sólo en cuanto a los contenidos de las cadenas públicas existentes, sino también en la asignación discrecional de permisos y licencias para la creación de nuevas emisoras. Rodríguez Zapatero ha reconocido que considera que debe haber más emisoras privadas de televisión de alcance nacional: España es el país europeo con menos cadenas privadas. ¿Por qué no liberalizar el mercado audiovisual de verdad? ¿Por qué no abrir el camino hacia la competencia leal?

Si la espera del dictamen de los *sabios* no es una simple estrategia electoral dilatoria, la definición del papel de lo público, de los recursos

que requiere y de cómo han de administrarse debería ofrecer el marco adecuado para una política de saneamiento y de solución a la sangría actual de recursos que supone encender nuestro televisor y sintonizar un programa de las cadenas públicas, monocolor y partidista. El servicio público debe garantizar la claridad en el manejo de fondos, y, sobre todo, la pluralidad ideológica. La tendencia a la monopolización de los medios por los grandes grupos empresariales impone una nueva, perentoria, necesidad: el servicio público debe ofrecer información plural, para todos los ciudadanos, sin sesgos ni menos aún manipulaciones. No ayuda a ello que el director y los miembros del Consejo de Administración sean designados directamente por el propio gobierno en el poder. En su lugar habría que buscar una fórmula que garantizase la máxima pluralidad en los órganos de decisión, y, sobre todo, personas de acreditada solvencia cultural, intelectual y de gestión. Para empezar, no estaría de más que se pensara en un Consejo que vigilara con esmero y sin condicionantes partidistas el cumplimiento de las obligaciones de un verdadero y saludable servicio público como corresponde ser a RTVE.

RTVE no demanda sólo saneamiento: necesita una verdadera refundación desde sus cimientos, en todos los sentidos, empezando por la drástica sustitución de los beneficiarios de los actuales sistemas de corrupción, que dentro del medio han impuesto sus decisiones, por profesionales creativos, capaces y, sobre todo, honrados. Esperaremos el dictamen de los *sabios* con el deseo que impone la urgencia de que, por fin, se encuentre una solución digna y efectiva; aunque la historia de los fracasos previos nos despierte un comprensible escepticismo. Les daremos un voto de confianza, aunque dos años parecen demasiado tiempo de espera para una situación que se ha mantenido durante décadas. ■



CADA SEGUNDO
MUERE
UNA PERSONA
DE HAMBRE
EN EL MUNDO

Manos Unidas

ONGD CATÓLICA DE VOLUNTARIOS

EL FUTURO DEL MUNDO ES COMPROMISO DE TODOS

manosunidas.org | ☎ 902 40 07 07